

EL COMPROMISO CON CHILE

FERNANDO GONZALEZ

CABE suponer que cuando se abrazaban en el aeropuerto de Barajas o, más tarde, en el palacio de Viana, Patricio Carvajal Pardo, ministro de Asuntos Exteriores de Pinochet, y Marcelino Oreja, ministro de la España "predemocrática", habrán tenido al menos una fracción de segundo para meditar sobre las complejas e inesperadas consecuencias que plantea la dependencia de los Estados Unidos. Uno, como responsable de un "estado de terror"; otro, como receptor obligado de alguien a quien Europa —a la que Marcelino Oreja aspira vehementemente— desprecia. Ambos son, aunque de manera muy diversa, engranajes de una política que se elabora desde niveles superiores. Ambos —aunque uno ahora evoluciona hacia la "democracia" y el otro sea un representante químicamente puro de la dictadura— habrán sentido la amenaza latente de las iras del Pentágono, las valedades de Kissinger o la asfixiante opresión de los intereses de la potencia a cuyo imperio pertenecen.

Al tiempo que el vicealmirante Carvajal Pardo volaba hacia Madrid después de pasearse por Europa de vergonzante incógnito, Sergio Díaz —senador en ciertos parlamentarios, miembro del Partido Nacional, equivalente a Alianza Popular en España—, embajador extraordinario de Chile ante las Naciones Unidas, arriesgaba malabarismos jurídicos en Ginebra. Ayudado por Fernando Zegers Santa Cruz, defendía ante la Comisión de los Derechos Humanos una acusación contenida en un extenso informe de más de trescientas páginas presentado por el Grupo de Trabajo ad hoc en virtud de la resolución B (XXX I) de dicha Comisión. El esfuerzo combinado de ambos no conseguía eclipsar el agobiante peso de las pruebas acumuladas. Nombres como Carmelo Soria (1), Marta Ugarte, Galdys Díaz Armijo, Orlando Letelier, etc., formaban verdaderas pilas de folios que ensangrentaban casi cuatro años de historia chilena. La Comisión, basándose en el informe elaborado, tras dos años de trabajo, por Ghulam Ali Allana (Pakistán), Leopoldo Benites (Ecuador), Félix Ermacora (Austria), Abdoulaye Diye (Senegal) y la señora M. J. T. Kamara (Sierra Leona), condenaba a la Junta chilena por veintiséis votos a favor, uno en contra —Uruguay— y cinco abstenciones.

De tal suerte, Patricio Carvajal era dimitido a distancia por su jefe, Pinochet, cuando aterrizaba en Madrid, condenado por las democracias. A Marcelino Oreja no le tembló el pulso cuando prendió en la solapa del "smoking" del canciller chileno la Gran Cruz de Isabel la Católica. Una vez más, el Gobierno de la Monarquía asumía el pasado franquista, que lastra su evolutividad futura. Podría suponerse que por tal acto de valentía —recibir imparable a un apestado político que puede arruinar su carrera en Euro-



La condena formal de la Comisión de los Derechos Humanos compromete la política exterior española, encubridora en Europa de la dictadura andina. En la fotografía, Marcelino Oreja y Patricio Carvajal.

pa, condenado y dimitido— Marcelino Oreja fue premiado con la Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile Bernardo O'Higgins.

La tortuosa historia de las relaciones hispano-chilenas a partir del golpe militar de 11 de septiembre de 1973 tiene unas especiales características. Ello parece lógico si, como es evidente, en ambos países estaban instauradas dictaduras militares potenciadas por los Estados Unidos. Parece incontestable que Washington jugó durante toda la época Nixon-Ford —lo cual implicaba a su vez que Henry Kissinger detentaba "el poder exterior"— una política de doble cara en la que España, su aliado internacional más firme, cargaba con la faceta incómoda de responder mundialmente como un interlocutor con Chile. El acceso de Carter a la Casa Blanca deberá alterar sensiblemente los aspectos formales de esta relación.

El eco de la "campaña" de Ted Kennedy, así como la electoral del propio Carter, exigían una "remodelación" de las dictaduras en el cono Sur de América. España, por su parte, iniciaba una larga y dilatada reforma para integrarse en Europa. Uno de los leitmotiv occidentales —también lo fue en ciertos momentos de la prensa reaccionaria y gubernamental española, como "Pueblo" con Emilio Romero— es condenar a Pinochet. Las vicisitudes

del Ministerio de Asuntos Exteriores en los días de la muerte de Franco para evitar la prolongación de la estancia del propio Pinochet, que vino al entierro, pero que no fue admitido para la ceremonia de la coronación, entran en los relatos de "suspense". La economía española —inversión privada y el INI— están, a su vez, volcados en Chile (2), lo que exige "una atención" a la dictadura chilena.

Dentro de estas inexplicables coordenadas, la situación española respecto a Chile se presenta como un callejón sin salida. Queda, no obstante, la esperanza de que una acción de la Casa Blanca "desestabilice" lo que antes "estabilizó". En este sentido deben de interpretarse las maniobras del delegado norteamericano en la Comisión de los Derechos Humanos, Brady Tyson, quien entonó un profundísimo "mea culpa" sobre la actuación directa de su país en el derrocamiento del régimen constitucional del Presidente Salvador Allende. Los espectadores de RTVE permanecieron petrificados cuando la voz impostada de Jesús Hermida repetía el texto del delegado: "Pedimos perdón al pueblo chileno por la intervención en la caída del régimen constitucional, sin excusas, lo que permitió la implantación de un régimen de terror que amenaza al país durante los tres últimos años...". La

siguiente jugada fue desmentir al delegado, que hablaba "a título personal". Sin embargo, Carter aprovechó la ocasión para reconocer que en Chile no se respetaban los derechos humanos. Finalmente, en la votación, los Estados Unidos están de acuerdo en condenar a la Junta chilena. Habilidosas jugadas en el terreno de la desestabilización que "ABC"—furbundo partidario de la dictadura chilena y, en general, de casi todas las de Occidente—denominaba torpemente "peligroso resbalón en la política exterior del Gobierno Carter".

Las primeras fisuras

Se ha insistido hasta la saciedad en que el "golpe" chileno se basaba en tres pilares: la unidad del Ejército, el apoyo de la oligarquía conectada con las inversiones norteamericanas y "El Mercurio". Si esto es cierto, el régimen de Pinochet, como tal, muestra las primeras fisuras (lo cual no quiere decir que vaya a desaparecer la dictadura o, al menos, el control de la zona, pero implica una variación formal que podría arrastrar la desaparición del dictador y la iniciación de una cautelosa reforma).

Después de la misteriosa muerte del almirante Bonilla —caído en circunstancias sospechosas en un helicóptero—, los accidentes de Toribio Medina y la desaparición de un grupo de militares en el lago Rucampó —entre los que debería estar el general Mendoza, que cambió de planes a última hora—, no cabe duda de que en el seno de la Junta se están produciendo tensiones que acusan una gangrena militar. El general Leigh, al que muchos suponen el sucesor de Pinochet, ha dejado filtrar que si "el no hubiese estado con la Junta hubiese sido socialista". Se rodea de una aureola de inteligencia, lo que debe de resultar fácil en el actual ambiente de Santiago. En todo caso, las fisuras militares están en la calle. Los comentarios sobre las divergencias entre "pacos", "milicos" y marinos son la comidilla de la pequeña burguesía, que en los primeros momentos apoyó a la Junta por temor histórico al socialismo.

La situación económico-laboral evoluciona peligrosamente. El reconocimiento oficial de una cifra de más del 22 por 100 de parados, así como un 7 por 100 de individuos incluidos en el trabajo "mínimo", hay que añadirlo a las recientes huelgas y plantones, en los que por primera vez se desafía a la férrea autoridad militar. El esquema económico de la escuela de Chicago está degradando a la población chilena. La oligarquía, que acumuló grandes sumas con las importaciones masivas en los primeros momentos, comienza a sentir los fallos. Las Cajas de Crédito, las finan-

NOTAS

(1) El asesinato, por miembros de la DINA, del exiliado español Carmelo Soria es uno de los sucesos más documentados del informe. Se aportan numerosos documentos —análisis, alcoholemia, informes médicos, testigos, etc.— que prueban sobradamente cómo este funcionario de CELADE fue eliminado, así como la desaparición de personas que fueron a interesarse por su suerte en su domicilio, como el doctor Insunza. El Gobierno español, naturalmente, mantuvo un discreto silencio.

(2) Inversionistas españoles en el sector pesquero, industrial, etc., están vinculados a financieros chilenos de los diversos grupos ("pirañas", "cocodrilos", "jaguales", etcétera). Tal es el caso del Banco Latino, cuyo presidente hasta hace poco tiempo era Fernando Larraín, destacado "piraña". El INI

ha hecho numerosas inversiones y concesiones de créditos de amplio margen.

(3) Antigua miembro de la Vanguardia Popular Socialista (antiguo partido nazi en Chile). El paralelismo entre la familia Edwards y los Luca de Tena respecto a las dictaduras en sus respectivos países es inevitable. En la mente de todos está el vuelo del marqués de Luca de Tena a Londres, con el talón de Juan March, para financiar el pronunciamiento del 18 de Julio contra el régimen constitucional. En 1975, Torcuato Luca de Tena expuso en "ABC" unas conversaciones con su "amigo", el general Pinochet, que eran una encandilada alabanza al dictador. Todo ello no es obstáculo para que se presente como candidato "democrático" por Madrid, de Alianza Popular. Posiblemente, los Edwards se presentarán como candidatos en la próxima reforma chilena.

cieras, el Banco Osorno, entre otros, están en suspensión de pagos. Pinochet, por su parte, habla exigido la destitución de altos funcionarios de los Ministerios económicos. Sergio Castro, ministro de Hacienda, o Pablo Baraona, presidente del Banco Central y ahora ministro de Economía, protestan. De la divergencia surgida se obtuvo el resultado de la dimisión exigida por el dictador a todo su Gabinete. El salario medio había llegado en su descenso a treinta dólares mensuales. Se estaba tocando fondo.

La influencia de la familia Edwards —propietaria de "El Mercurio"— y sus vinculaciones con el clan Rockefeller son uno de los sustentos básicos de la dictadura. El presidente de "El Mercurio", Agustín Edwards ("el Duni"), tuvo que huir de Chile antes de que Salvador Allende accediera a la Presidencia. Temía —y con razón— una revisión de sus créditos y su utilización. Fue sustituido por Fernando Leniz Cerdá, que después del golpe pasaría a ocupar la primera cartera de Economía de Pinochet. Desde entonces, "El Mercurio" y la dictadura han marchado paralelos. Duni Edwards se incrustó en el grupo CRECINCO, dominio de los Rockefeller y del Opus Dei. Se ha hablado de que "El Mercurio" había servido como introductor del dinero de la CIA, mediante un socio del Opus Dei del grupo Boston, José Miguel Ibáñez (que firmaba artículos en "El Mercurio" con el seudónimo de Ignacio Valente, hijo del superintendente de Bancos con la Junta. Sin embargo, René Silva Espejo (3), director de "El Mercurio", ha permitido en los últimos tiempos la aparición de ciertas críticas que intranquilizan al poder. La carta de Jorge Alessandri —miembro del llamado Consejo de Estado— quejándose de que "desde este Consejo no puedo hacer nada porque nadie me escucha", así como la aparición de suaves críticas mediante la reproducción de temas del extranjero, hacen suponer que la gente de "El Mercurio" prepara su próxima baza en el reformismo, la metamorfosis no puede extrañar a los españoles, que han visto el silencio sepulcral caído sobre Franco y la deserción de los colaboracionistas, hoy máximos defensores de la "democracia".

La atenuación del terror

Todo lo expuesto anteriormente no ha de llevar a pensar que en Chile se acerca el fin de la dictadura. Los Estados Unidos no pueden consentir en su órbita una evolución peligrosamente democrática. Simplemente se acumulará sobre una figura —el dictador— todos los males nacionales, forzando así su desaparición (muerte, enfermedad —menos probable—; el exilio a Paraguay), siendo sustituido por el general Leigh, quien procedería a una reforma progresiva. Figuras como Frei o Gabriel Valdés —aunque el primero está muy desprestigiado por su participación en el golpe, pese a su alejamiento posterior— iniciarían una cierta forma de democracia que el Presidente Carter vería con buenos ojos. Todo ello forma parte de su "operación disidentes", para lo que necesita un cono Sur más aligerado de dictadores.

Las largas listas de desaparecidos, detenidos y muertos que pueblan el informe de la Comisión de los Derechos Humanos son una acusación muda para quien, como Marcelino Oreja, firmó las actas apenas hace unos meses en Nueva York, para el respeto de los Derechos Humanos. Solamente la FPS (Federación de Partidos Socialistas) de los llamados partidos democráticos —y esto incluye a derecha e izquierda— ha protestado formalmente de la presencia del dimitido ministro chileno en Madrid. El significativo silencio de los demás partidos, al menos de los legalizados, muestra el desinterés o la falta de agilidad política con que se van a enfrentar a las próximas elecciones.

Sobre la tortura en Chile, el informe obtiene (en la página E/CN.4/1221, anexo XVI, página 9) las siguientes conclusiones:

"... las técnicas de tortura aplicadas en Chile, entre septiembre de 1973 y marzo de 1976, en los 248 casos examinados...:

1) Al principio, durante el primer semestre, prevalecen la tortura física salvaje y la tortura psicológica específica tradicional, sobre un segundo plano intrínseco de agotamiento físico... Se observa un principio de tortura físico selectivo-progresiva.

2) A partir de marzo de 1975 se observa una inversión de porcentajes... La tortura física selectivo-progresiva y la tortura psicológica refinada van cobrando cada vez más importancia.

3) El período intermedio, entre marzo de 1974 y marzo de 1975, es el de transición. En esa época, la Junta Militar organizó una superestructura policial autónoma, la DINA, que centraliza los diferentes servicios, reúne datos sobre experimentos y prácticas de tortura y los evalúa, introduce especialistas adiestrados en el extranjero y transforma a los verdugos en funcionarios, dándoles una formación especializada".

No han sido infructuosos los dos años de investigación de la Comisión de los Derechos Humanos. El informe final, aplastante, definitivo, explica con precisión técnica el proceso de degradación de un país al que, por otra parte, se somete a la mayor crisis económica de su historia, forzando al hambre y a la prostitución a las capas medias e inferiores de la población. En una entrevista póstuma de Orlando Letelier —asesinado por la DINA— aparecida en "Playboy", Tad Szulc comenta las peripecias de los prisioneros políticos con esa despreocupación del Wasp norteamericano, al que todos esos problemas afectan indirectamente: "Ciento cincuenta mil sudvietnamitas —comenta demagógicamente— han sido autorizados a residir en los Estados Unidos; sólo veinte familias chilenas han sido, a su vez, autorizadas a residir a partir del golpe de 1973. Demasiado humanitarismo norteamericano...".

La llamada de atención sobre Chile, ahora ya sin paliativos regido por un férreo grupo de genocidas, no debe desviar la atención sobre el resto de los problemas similares del cono Sur americano. Condenando maniqueamente a Pinochet, "Occidente" se lava las manos y continúa capitalizando la problemática de los disidentes de la Unión Soviética. Demasiado fácil. ■

La batalla ecológica

Elecciones en Francia

Si en duda alguna, la peculiaridad más notable de las elecciones municipales francesas de los días 13 y 20 de marzo es la impetuosa aparición de las listas de los movimientos ecológicos. Mil doscientos candidatos "verdes" se presentan, en listas completas o de forma aislada, en unas sesenta comunas.

No era de esperar que la modestísima aparición electoral en las presidenciales de 1974 de los preocupados por el medio ambiente diera lugar a esta "marea verde" de tres años después. René Dumont, uno de los ecologistas más prestigiosos, obtuvo un reducido —pero indicativo— 2,3 por 100 (unos trescientos mil votantes) en mayo de 1974. Esta vez los sondeos señalan que en algunas localidades los candidatos de la vida sana contarán con el 20 por ciento de los electores.

En estos últimos años el sentimiento reivindicativo por la calidad de vida en Francia ha crecido espectacularmente. A su manera, el Presidente Giscard ha mantenido una clara postura de respaldo de esta inquietud y ha promovido realizaciones de interés, tanto administrativas como jurídicas, en el campo del medio ambiente. Las movilizaciones populares de protesta, sin embargo, no se han mantenido precisamente dentro del benévolo marco que el Poder querría aplicarle. Toda Francia es un hervidero de conflictos ecológicos; casi seis mil asociaciones, con medio millón de socios, ofrecen todo un espectro de posibilidades de acción reivindicativa del medio y la calidad de vida.

La importancia de este fenómeno y el volumen creciente de electores potenciales ha producido conmoción entre los partidos políticos, principalmente entre los de la izquierda. Estos se esfuerzan en atraer de su parte los votos ecologistas, insistiendo en que el apoliticismo de los medioambientalistas solamente favorece a los intereses capitalistas constituidos.

Por una mezcla de menosprecio y venganza, los ecologistas no parecen dispuestos a recomendar a sus seguidores que voten por nadie en concreto en los casos en que no lleguen a la segunda vuelta (que será cuando no se consiga el 12,5 por ciento de votos). Para ellos es simple oportunismo lo que hace a la izquierda "convertirse" a la

calidad de vida, ya que son frecuentes las incomprensiones, por motivos concretos en conflictos medioambientales, entre las masas indignadas y los representantes políticos de los partidos de oposición.

La izquierda, por su parte, considera "muy positiva" la presencia de candidatos ecologistas, pero no se priva de acusar de ambiguos e irresponsables algunos de los argumentos de los candidatos "verdes". Se trata, según estos partidos, de señalar a los culpables de la contaminación, de la especulación y del agobio de las ciudades, por lo que el ecologismo es un capítulo más o menos relevante de la lucha de clases.

Los ecologistas desconfían de que, una vez en el poder, las izquierdas consiguieran hacer una política mucho más distinta de la que ha regido hasta ahora. En general, es un radicalismo generalizado lo que caracteriza la postura de las asociaciones y sus líderes. La "Gueule Ouverte", principal publicación ecológica, señala que hay dos puntos que denuncian la doblez y la incapacidad de los partidos políticos: la cuestión nuclear y el tema del Poder. Las concepciones ante estos dos puntos "impiden considerar a ningún partido como ecológico". René Dumont, comentando el "manifiesto" del Presidente Giscard en favor de la ecología, hecho en su reciente visita a Bretaña, ha expresado que, al contrario de las vaguedades oficialistas, los ecologistas pretenden "prohibir" el automóvil privado en las ciudades y detener el crecimiento del consumo energético.

En el caso de París, donde el frente "Paris-Ecologie" presenta 109 candidatos y cuenta con pasar a la segunda vuelta en algunos barrios, las posturas son ciertamente irreconciliables. Mientras socialistas y comunistas condenan el abandono de la ciudad por parte de la derecha, con el despoblamiento incesante y la desindustrialización, los ecologistas propugnan crecimiento cero y sustitución de zonas urbanas e industriales por espacios verdes. A todo esto, los candidatos giscardiano (D'Ornano) y gaullista (Chirac) han convertido su polémica particular en la clave del futuro de Francia. Por eso el órgano trotskista "Rouge" se lamenta de la actitud de los ecologistas. "De ellos depende, dice, que París bascule a la izquierda" ■